

**Puerto Montt, diecinueve de abril de dos mil veintitrés**

**VISTO.**

**I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:**

**PRIMERO:** Que con fecha 17 de junio de 2022, se ha dictado sentencia definitiva de primer grado por el Juzgado de Letras de Castro, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en contra de la empresa de Institución Financiera Cooperativa COOPEUCH.

Respecto de dicha sentencia, la demandada interpone recurso de casación formal, basado en las causales establecidas en los numerales 4 y 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

La demandada alega primeramente que la sentencia fue pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, en concreto, los del numeral 4, que se refieren a las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento al fallo.

En segundo lugar invoca como causal de casación la *extra petita* en que habría incurrido la sentencia recurrida, es decir, extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal, vulnerando así el principio de congruencia y los límites de la pretensión deducida en juicio.

**SEGUNDO:** Que el recurso de casación en la forma tiene como finalidad exclusiva la invalidación de la sentencia por las causales expresamente establecidas por la ley, y se encuentra sometido a un régimen jurídico de carácter extraordinario y de derecho estricto, cuyas causales se clasifican en vicios cometidos en la sentencia y otros vicios en la tramitación de la causa.

**TERCERO:** Que la recurrente invoca como primera causal de casación la omisión del tribunal de cumplir con lo dispuesto en el artículo 170 numeral 4, en relación al artículo 768 numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la sentencia impugnada no contiene las consideraciones de hecho y de derecho exigidas por la normativa citada.

Que de acuerdo con lo establecido en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es causal de casación en la forma el haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo

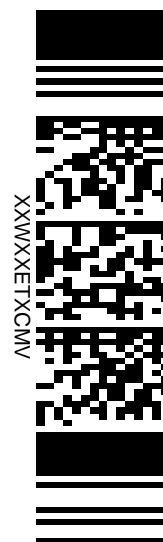


170. A su vez, el N° 4 de dicho precepto establece que las sentencias definitivas de primera o única instancia, y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, deben contener las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, y el N° 5 exige que se enuncien las leyes, o en su defecto, los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia.

Que la jurisprudencia de manera uniforme ha sostenido que las consideraciones de hecho y de derecho exigidas por el N° 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los N° 5, 6 y 7 del Auto Acordado de la Corte Suprema de 30 de septiembre de 1920, tienen por finalidad asegurar la justicia y legalidad de los fallos, y proporcionar a las partes los antecedentes necesarios para conocer los motivos que llevaron a la decisión del litigio. En consecuencia, para cumplir con el N° 4 del artículo 170, la sentencia debe establecer de manera precisa los hechos justificados conforme a la ley, la apreciación correspondiente de las pruebas, y las consideraciones de derecho aplicables al caso.

**CUARTO:** Luego de examinar el fallo en cuestión, se puede descartar la infracción alegada por parte del recurrente. La sentencia impugnada contiene las consideraciones que llevaron al tribunal a acoger la demanda de indemnización de perjuicios, aunque los argumentos expresados sean contrarios a las alegaciones del reclamante. Sin embargo, estos argumentos son suficientes para concluir que no se configura el vicio que se reprocha, ya que la sentencia contiene las motivaciones fácticas y jurídicas en las que se basa su decisión.

En efecto, al revisar la sentencia impugnada, se puede apreciar que el juez abordó la discusión sobre las alegaciones presentadas, analizando tanto los argumentos de hecho como los de derecho. El mero hecho de no compartir los razonamientos expresados en el fallo no invalida la sentencia en el marco de esta causal formal. Además, dichos razonamientos también fueron sustentados en la apelación. En consecuencia, al no existir la omisión denunciada, no procede sino rechazar el recurso de nulidad formal en esta parte.



**QUINTO:** Que la segunda causal del recurso de nulidad formal invocada se basa en el numeral 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la concesión "*ultra petita*", es decir, otorgar más de lo pedido por las partes o extender la decisión del tribunal a puntos no sometidos a su conocimiento, sin perjuicio de la facultad que el tribunal tenga para fallar de oficio en casos determinados por la ley.

La recurrente alega que el fallo impugnado incurre en el vicio de nulidad invocado, ya que en el caso en cuestión se extiende la decisión a asuntos que no fueron presentados para su consideración. Según argumenta, se condenó a la demandada al pago de reajustes e intereses, los cuales no fueron solicitados por la demandante.

**SEXTO:** Que la causal de nulidad formal en cuestión establece dos formas en que puede configurarse: a) cuando se otorga más de lo pedido, lo cual se conoce como "*ultra petita*", y b) cuando la sentencia se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, lo cual se denomina "*extra petita*". En consecuencia, se incurre en el vicio de nulidad cuando se altera el contenido de las acciones o defensas presentadas por las partes, apartándose de los términos en los que situaron la controversia, cambiando el objeto o la causa de pedir entre lo solicitado por el actor y lo alegado por la contraparte. Esto resulta en una incongruencia entre los términos en los que las partes formularon sus pretensiones y lo resuelto por el tribunal.

Que de la lectura del petitorio de la demanda y lo resuelto por el juez de instancia cabe apreciar que en definitiva se acoge la demanda de indemnización de perjuicios, condenando a la demandada al pago de \$7.000.000 por concepto de daño moral, cuando solicitó \$15.000.000 por dicho concepto, más reajustes e intereses en los términos establecidos en lo resolutivo del respectivo fallo.

De modo que, del examen anterior, cabe concluir que el juez a quo no ha concedido más de lo que se le pidió por la demandante, de acuerdo a la forma en que se formularon las peticiones concretas sometidas al fallo del tribunal, ni se ha extendido a asuntos que no fueron sometidos a la decisión judicial, existiendo plena congruencia entre estos extremos.



**SÉPTIMO:** Que respecto de la naturaleza y función y finalidad que en derecho de daños tendrían los reajustes e intereses, estos sentenciadores comparten los argumentos expuestos por el juez a quo entre los considerandos octogésimo tercero y octogésimo sexto. Razones que sumadas a las expuestas en los motivos precedentes implicarán que el recurso de nulidad formal sea desestimado.

## **II.- En cuanto al recurso de apelación:**

Se reproduce la sentencia en alzada su parte expositiva y sus considerandos.

Y se tiene, además y en su lugar presente.

**OCTAVO:** Que respecto de la configuración en la especie de los distintos elementos que configuran la responsabilidad civil extracontractual, estos sentenciadores comparten, en general, buena parte de los argumentos y conclusiones arribadas en el análisis pormenorizado que realiza el juez a quo entre los considerandos trigésimo séptimo y sexagésimo de la sentencia impugnada, con las salvedades que se anotarán.

**NOVENO:** Que respecto del elemento daño de la responsabilidad civil extracontractual, cabe dejar sentado que en los sistemas de responsabilidad civil, como el adoptado en nuestro ordenamiento civil, regido por los principios de reparación integral y *pro damnato*, no cabe duda de que el elemento fundamental es el daño. Este elemento es esencial en cualquier acción indemnizatoria de responsabilidad civil, ya que su principal función es resarcir o compensar, según corresponda, los perjuicios, tanto económicos como no económicos, sufridos por la víctima como resultado de la actuación negligente o dolosa del agente causante. En este sentido, el daño es el elemento clave del sistema, ya que sin la existencia de perjuicio, no sería posible sostener la obligación de reparar o resarcir antes mencionada.

**DÉCIMO:** Respecto de la justificación dogmática del resarcimiento de aquellos perjuicios de naturaleza extrapatrimonial, donde cabe ubicar como sub especial al daño moral, relevante resulta destacar que en virtud de la influencia de la escuela del derecho natural, se consagra la fórmula general de responsabilidad



aquiliana en el conocido artículo 1382 del *code*, equivalente a los artículos 2314 y 2329 de nuestro código civil. En este sentido, lejos de establecer de manera taxativa los casos de daños indemnizables, dichos preceptos enumeran los requisitos esenciales que dan lugar a la responsabilidad extracontractual y, por ende, a la obligación de indemnizar los perjuicios que sean razonablemente probados en juicio.

Si bien durante el siglo XIX la tendencia a formular un concepto general de daño se plasmó en gran parte de los códigos civiles de esa época, en la evolución codificadora se pueden observar dos enfoques diferentes: a) Por un lado, los sistemas de tipicidad o supuestos cerrados, que excluyen la posibilidad de exigir reparación por otros daños que no estén dentro de la enumeración que utiliza el respectivo precepto. En estos sistemas, el daño antijurídico es el objeto general de reparación, exigiendo además la lesión de un derecho subjetivo para dar lugar a la indemnización; b) Por otro lado, los sistemas abiertos, de cláusula general o de atipicidad del perjuicio, que se estructuran bajo una cláusula abierta en la que solo se mencionan aquellos requisitos esenciales que dan lugar a la correspondiente responsabilidad aquiliana, tal como se puede concluir de la lectura de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil.

En resumen, en el primer enfoque mencionado (sistema típico), se puede apreciar que el daño estará determinado por aquellos derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico proteja con la respectiva acción resarcitoria, siendo la idea de daño limitada a lo que la ley califique como derechos. Por otro lado, la segunda orientación explicada (sistemas de cláusula general) comprende en general todos los intereses de la víctima, ya sean patrimoniales o extrapatrimoniales, siempre que cumplan con ciertos requisitos para ser objeto de tutela civil indemnizatoria.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que respecto del contenido del principio *pro damnato*, o también llamado *favor victimae*, en palabras del profesor Luis Díez-Picazo y Ponce de León encierra “la idea de que por regla general todos los perjuicios y riesgos que la vida social ocasiona deben dar lugar a resarcimiento, salvo que una razón excepcional obligue a dejar al dañado sólo frente al daño”. En efecto, la concepción clásica de la responsabilidad civil sostenía que el perjuicio sufrido por



la víctima debía cumplir con un requisito de certeza interpretado de manera restrictiva, como condición para activar los mecanismos de responsabilidad. Sin embargo, en la actualidad se observa un consenso en torno a adoptar una perspectiva integradora de dicho requisito, modelada, entre otros, por el principio antes aludido.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que respecto del caso de marras cabe reflexionar sobre si nuestro sistema de responsabilidad civil, subjetivo y de cláusula general de daño, entrega tutela resarcitoria a aquellos perjuicios de naturaleza extrapatrimonial que derivan de lesiones a derechos de la personalidad y/o garantías fundamentales, y en caso de ser afirmativo dicho cuestionamiento, determinar la naturaleza y *quantum* del perjuicio, que a juicio de estos sentenciadores cabe apreciar por la vulneración de la normativa constitucional y legal que proscriben cualquier acto de discriminación arbitraria.

Así, cabe entender la recepción, en nuestro sistema de responsabilidad civil extracontractual de clausula general de daño, de aquellos perjuicios que derivan de actos de autoridad o particulares que lesionen directamente sus derechos de la personalidad y/o garantías fundamentales, se configura en este punto un perjuicio de naturaleza extrapatrimonial con entidad suficiente, a juicio de estos sentenciadores, para merecer tutela civil resarcitoria.

**DÉCIMO TERCERO:** Que respecto de la forma en que debería repararse el perjuicio extrapatrimonial en comento, en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, en ausencia de disposiciones expresas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil que establecen cómo debe llevarse a cabo la reparación del daño, es necesario examinar detenidamente las diversas formas en que dicha reparación puede ser efectuada. En este contexto, destacan dos modalidades particulares de resarcimiento del daño: la indemnización por el equivalente y la reparación en forma específica o in natura.

La indemnización por el equivalente pecuniario, implica la entrega a la víctima del perjuicio de una cantidad de dinero. En el caso de perjuicios patrimoniales, esta suma debe ser equivalente al valor del daño sufrido, mientras que en el caso de perjuicios extrapatrimoniales, esta suma debe ser suficiente o



adecuada para compensar el daño experimentado por el perjudicado. Así, se desprende que la indemnización por equivalente pecuniario se materializa siempre como una obligación de entregar una suma de dinero, la cual no restituye al perjudicado la misma utilidad de la cual fue privado como resultado del hecho dañoso, sino más bien un interés o utilidad distinta. Por lo tanto, se sostiene que este tipo de reparación cumple una función compensatoria. Es relevante destacar que esta función compensatoria del dinero ha sido desarrollada principalmente en relación con los perjuicios extrapatrimoniales, como el daño moral y las consecuencias no económicas de los perjuicios corporales, debido a la dificultad de valorarlos en términos monetarios, lo cual hace que sea imposible establecer una equivalencia precisa entre el daño sufrido y una suma de dinero.

**DÉCIMO CUARTO:** Que teniendo por acreditada la existencia del daño moral por discriminación arbitraria, y lo reflexionado anteriormente cabe pronunciarse sobre su quantum, el que para su determinación se tendrá presente su función compensatoria, así como los principios *pro damnato* y de reparación integral, moderándose prudencialmente en la suma de \$3.000.000 (tres millones de pesos), más reajustes e intereses.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales analizadas y visto, además lo dispuesto en los artículos 186, 187, 189, 765, 766, 768 y 798 del Código de Procedimiento Civil; artículos 3, 4, 5, 21, 22 y 25 de la Ley N° 21.120 sobre identidad de género, artículo 2 de Ley N° 20.609 que establece normas contra la discriminación, artículos 2314 y siguientes del Código Civil, se resuelve:

I.- Que, se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por la demandada en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 17 de junio de 2022 por el Juzgado de Letras de Castro;

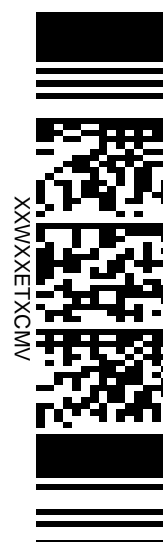
II.- Que, se confirma la sentencia antes individualizada, con declaración en el sentido de rebajar la condena a la demandada al pago de una suma única de indemnización por daño moral equivalente a \$3.000.000.- (tres millones de pesos), más reajustes e intereses, a favor del demandante.

III.- Que, no se condena en las costas del recurso a la demandada por no haber resultado completamente vencida.



Redactada por Abogado Integrante, Sr. Darío Parra Sepúlveda  
Regístrese y devuélvase.

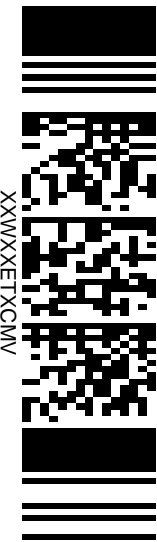
**Rol Civil N°793-2022.**





Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A., Ministro Jaime Vicente Meza S. y Abogado Integrante Dario Parra S. Puerto Montt, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

En Puerto Montt, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>